

Bolivia: La hora del cambio

GUSTAVO FERNÁNDEZ

Ex Ministro de Relaciones Exteriores y de la Presidencia de Bolivia

RESUMEN

La historia de Bolivia se encuentra en un punto de inflexión. Varios problemas han hecho crisis en este momento. Unos vienen de lejos. Otros, más recientes, son producto de la complejidad de las sociedades modernas. Juntos, marcan la agenda del cambio profundo que el país tiene que enfrentar. Ahora.

Elecciones de Prefectos Departamentales, Referendo Autonomico y Asamblea Constituyente, se perfilan en el horizonte como los hitos en los que se debatirán esas cuestiones. Y, al final del camino, en agosto del 2007, un punto en el que debiera asumir el poder un Presidente con mandato y proyecto histórico.

Es una hoja de ruta difícil, llena de obstáculos. Acompañándola, como una sombra, está siempre la amenaza de una solución de fuerza.

En las páginas que siguen intentaré un resumen de la agenda, los protagonistas y el escenario de ese debate.

Palabras clave: Historia de Bolivia. Poder regional. Nuevo equilibrio. Descentralización política. Autonomía operativa y administrativa.

ABSTRACT

The history of Bolivia is in a point of inflection. Various problems have made crisis at this moment.

Some of them come from a long time ago. Others, more recent, are product of the complexity of the modern societies. Together, they mark the agenda of the deep change that the country must face. Now.

Elections of Departmental Prefects, Autonomic Referendum and Constituent Assembly, are outlined in the horizon like the

landmarks in which those questions will be discussed. And, at the end of the way, in August of the 2007, a point in which had to assume the power a President with a mandate and an historical project.

It is a difficult route, full of obstacles. Accompanying it, like a shade, it is always the threat of an strength solution.

In these pages I will try to do a summary of the agenda, the protagonists and the scene of that debate.

Key words: Bolivia's history. Regional power. New balance. Political decentralization. Operative and administrative autonomy.

EL ESCENARIO

En la noche del viernes 17 de octubre de 2003, Carlos Mesa juró como Presidente de la República. Sucedió a Gonzalo Sánchez de Lozada, cuya fórmula integró como candidato a la Vicepresidencia en las elecciones generales del año anterior. Periodista, hizo su prestigio como entrevistador de televisión. No era un personaje de arraigo popular, pero la reputación de hombre independiente lo hacía atractivo para un sector importante de la clase media. Su aporte de dos puntos o tres puntos en el caudal electoral posiblemente marcó la diferencia en una final tan reñida como la de 2002. Sus primeros días en el nuevo Gobierno no fueron muy gratos. La celeridad con la que el grupo palaciego y los partidos de gobierno lo pusieron en la congeladora, no le auguraban tiempos placenteros. Hasta que chocaron las capas tectónicas de la sociedad boliviana y desencadenaron el cataclismo que todavía estremece el escenario político boliviano.

Una cosa es llegar al gobierno y otra gobernar.

Tuvo a su favor, sin duda, la legitimidad institucional y el apoyo de la comunidad internacional, Brasil, Argentina y Estados Unidos en primera línea. Y ese soporte pesa en el tiempo de la Carta Democrática Interamericana. La opinión pública, que necesitaba con urgencia algo de normalidad para retomar el ritmo de la vida cotidiana, se colocó de su lado, dentro del país. De allí su alto índice de popularidad. Sin embargo, esa aceptación siempre fue insuficiente para enfrentar con éxito los temas que los acontecimientos y él mismo pusieron en la agenda.

Entre la calle y el Congreso, Carlos Mesa llegó sin proyecto ni base política. No lo acompañaba un solo parlamentario. Y tuvo al frente, esperando su momento, con el control del Poder Legislativo, a la clase política tradicional, a la que tanto atacó como periodista. No podía contar tampoco con el auxilio de los movimientos sociales y de los partidos anti sistémicos, porque ellos no combatieron para que él tomara las riendas del Gobierno. El apoyo del MAS y del MIP fue estrictamente táctico. Los empresarios nacionales y extranjeros apenas lograban ocultar su desconfianza. Lo aceptaron porque no tenían otra carta. En verdad, fue la falta de alternativas, para la izquierda y para la derecha, la que explicó la supervivencia de su Gobierno.

Definió su transición como el desplazamiento de una era histórica a otra, de una institucionalidad republicana a otra, y, en esas condiciones, tomó para sí la que llamó la agenda de octubre. Lo hizo en El Alto y en la Plaza San Francisco, ante la multitud que celebraba el derrocamiento de Goni, con la responsabilidad de convocar un referendo vinculatorio para definir el destino de la explotación de gas –y el de la economía boliviana– por un lado y, por otro, el de refundar la República en una Constituyente. Un gran partido, con un gran liderazgo, con cómoda mayoría parlamentaria, hubiera tenido considerables dificultades para enfrentar esa agenda. Mesa, que no tenía otra cosa que la fuerza de su experiencia mediática, confió en su capacidad de comunicación directa con la audiencia y se lanzó a la aventura.

Todos los que conocen la compleja trama empresarial, técnica, financiera, diplomática e histórica de la industria del gas, saben que no es de esos nudos que se pueden cortar de manera tan simple y expedita como la de un referendo. Y así fue, efectivamente. Las cinco preguntas de la consulta, ambiguas y contradictorias, no resolvieron ningún problema. Crearon otros, adicionales. Su incoherencia quedó en descubierto en el momento en que se tuvo que enfrentar al desafío de convertir las preguntas y respuestas en norma jurídica. En medio del desorden político, sin partidos estructurados, con un gobierno que no parecía encontrar rumbo y que llegó a presentar cinco diferentes proyectos de ley, el resultado fue el que cabía esperar. Una ley contradictoria, que requerirá un serio trabajo de cirugía plástica.

Vencido el referendo del gas, el MAS y los grupos radicales concentraron su atención en las elecciones municipales de diciembre.

Y sufrieron su primer desengaño. El MAS se consolidó como opción política real, pero en escala bastante menor a sus pretensiones. Ganó el voto rural, pero quedó claro que la clase media de las ciudades no sólo no lo apoyaba sino que lo temía. Estaban convencidos de que arrasarían el escrutinio y que de allí para adelante serían una fuerza incontenible. No fue así. No ganaron en ninguna de las capitales de departamento. Les dolió, sobre todo, su derrota aplastante en El Alto, escenario de la insurgencia de octubre. Los votantes reeligieron a varios Alcaldes y enviaron un mensaje de significado evidente. Querían vivir con cierta normalidad y terminar con la fragmentación del sistema político, cuyas consecuencias tenían que pagar todos los días. Por eso estaban dispuestos a dar mandatos claros, inclusive a dirigentes de los partidos políticos tradicionales, a condición de que garantizaran gestiones eficientes. Quedó entonces la impresión de que el sistema político comenzaría a recomponerse alrededor de los burgomaestres, cuya legitimidad y apoyo ciudadano no podía discutirse.

Luego de los comicios municipales, parecía haber llegado el momento de definir la composición, competencias y objetivos de la Constituyente. Pese a los resultados de los comicios municipales, los grupos de poder de Santa Cruz que no estaban —que no están— dispuestos a depender de las decisiones de una Constituyente dominada por los grupos indígenas y radicales, sobre todo en el tema de la tierra, decidieron curarse en salud y tomar la iniciativa. El incremento del precio de los carburantes, particularmente del diesel, aprobado por el Gobierno como parte de un paquete de ajuste presupuestario, les dio la oportunidad. Plantearon entonces la anulación de ese Decreto y en la estela de la movilización colocaron en la mesa su propia demanda de autonomía. Y para demostrar su fuerza convocaron a la que habría de ser la más grande concentración humana hasta entonces registrada en el país. Cerca de 300.000 personas llenaron la Plaza del Cristo el viernes 28 de enero de 2005 y convirtieron ese Cabildo Abierto en un hito de la historia política boliviana. Para salir del paso, el Presidente resolvió cancelar el aumento de precios del diesel y más tarde se vio obligado a renunciar a su prerrogativa constitucional para designar la primera autoridad política departamental. Anunció que nombraría Prefecto a la persona que ganara las elecciones departamentales que convocó para agosto de este año.

Por esos mismos días, la Federación de Juntas Vecinales de El Alto convocó a un paro pidiendo la expulsión de la empresa Aguas del Illimani, que provee servicio de agua potable a las ciudades de La Paz y del propio Alto. La actividad se detuvo totalmente en la aglomeración urbana que mira la capital de la República desde la ceja del Altiplano. Se bloquearon los ingresos de la autopista que conecta el aeropuerto internacional y se rodeó la planta de Senkata, que abastece de combustibles a la ciudad de La Paz. Parecía reproducirse la combinación de factores que provocó la explosión de la guerra del agua de Cochabamba, de febrero de 2001, y el fantasma de octubre volvió a rondar por los pasillos del poder. Evo Morales endureció su posición, rompió su apoyo táctico al Gobierno y pidió el adelantamiento de elecciones. Declaró a Mesa «primer enemigo del pueblo».

En esa pesada atmósfera circuló insistente la versión de que las Fuerzas Armadas advirtieron al Presidente que se verían obligadas a intervenir para evitar que el Cabildo de Santa Cruz dividiera al país. Las instituciones principales, incluyendo los alcaldes recientemente electos de ocho de los nueve departamentos, apoyaron al Gobierno en defensa de la unidad nacional, percibida como amenazada por el movimiento cruceño, para desengañarse a los pocos días por la forzada concesión del Presidente para la elección de Prefectos y por el Decreto que daba por concluido el contrato con Aguas del Illimani. Así se cerró ese capítulo, por el momento.

De esa manera, la agenda de enero (de 2005) equilibró a la de octubre (de 2003). El MAS y los grupos radicales ya no imponían sus condiciones, pero tampoco los grupos cruceños podían hacerlo. Era un mate ahogado. Ninguno de los jugadores podía mover una pieza. Empate catastrófico, lo llamó un comentarista.

Urgido de encontrar una forma activa de relacionamiento con el Poder Legislativo, Mesa promovió la conformación de una brigada parlamentaria propia, integrada por Diputados y Senadores que, para ese fin, se alejaron de los Partidos que los habían llevado al Congreso. Como tantas otras de sus medidas, ésta resultó totalmente contraproducente. Los Partidos, incluido el MAS, recibieron el mensaje y colocaron a Mesa en la condición de interlocutor poco confiable. No mejoró su conexión con el Parlamento.

Con el ánimo de recuperar la iniciativa el MAS ordenó bloquear los caminos del país, a principios de marzo de este año, para presionar al Congreso para la aprobación de una Ley de Hidrocarburos confiscatoria y por la convocatoria a la Constituyente, con el propósito de postergar el Referendo Autonómico demandado por Santa Cruz y las elecciones de Prefectos Departamentales. Simultáneamente, las Juntas Vecinales de El Alto cerraron nuevamente las rutas a la ciudad de La Paz, pidiendo la inmediata expulsión de la empresa Aguas del Illimani.

Contra las cuerdas, Mesa recurrió a su última carta: colocar al país ante las consecuencias de su renuncia. Calculó bien su jugada, ya que sabía que sus dos posibles sucesores constitucionales –los Presidentes de las Cámaras de Senadores y Diputados– representan a un sistema político colapsado y están marcados por el estigma de desprestigio de los partidos tradicionales. Por eso enfrentó a Evo Morales y los dirigentes de las Juntas Vecinales de El Alto y presentó su renuncia al Congreso, en la certeza de que no la podían aceptar. La opinión pública, medios, empresarios, Fuerzas Armadas pidieron que se rechazara la renuncia. Los Gobiernos de Brasil, Argentina, Estados Unidos se pusieron en movimiento y advirtieron de los riesgos de la crisis boliviana. Pero esta vez ocurrió algo más. Las clases medias salieron a las plazas de las principales ciudades para enfrentar a los grupos radicales y apoyar al Gobierno. Les perdieron el miedo y por un momento les disputaron el control de la calle. Evo Morales, el MAS y los grupos radicales de El Alto fueron los principales perdedores de esta confrontación. Se vieron obligados a levantar los bloqueos.

La Iglesia mantuvo una prudente distancia del Gobierno. Se limitó a pedir cordura a las partes en conflicto y no se pronunció explícitamente por el rechazo de la renuncia. Representantes de la Conferencia Episcopal aparecieron en una conferencia de prensa junto a la Defensoría del Pueblo y la oficina de Derechos Humanos para anotar que el pacto político era insuficiente y reclamar la negociación de un pacto social.

El 12 de marzo, el Presidente y los partidos del Poder Legislativo hicieron las paces y firmaron un acuerdo político para aprobar la Ley de Hidrocarburos, la elección de Prefectos, el Referendo Autonómico y la convocatoria a la Constituyente, en acto solemne que incluyó un

Mensaje del Presidente en el Congreso Nacional. El MAS, como era previsible, salió de la sala y no suscribió el documento. Lo denunció como la reedición de las coaliciones políticas de la «democracia pactada» y decidió, por su parte, establecer una alianza antioligárquica con los grupos más radicales del sindicalismo, de los que antes se había distanciado.

Todo indicaba que Carlos Mesa había tomado la iniciativa. Aunque su relación con las clases medias era inorgánica, su decisión de enfrentar a Evo Morales aumentó su popularidad.

En esas circunstancias, sorpresivamente, la noche del 15 de marzo, el Presidente decidió dar otro golpe de efecto. Atacó a los Partidos por no aprobar la Ley de Hidrocarburos que él quería. Los denunció por faltar a sus compromisos y afirmó que «ya no se podía gobernar Bolivia con los actuales parlamentarios». Anunció que enviaría al Congreso un proyecto de ley para adelantar elecciones generales de Presidente, Constituyente, Congreso y Prefectos, para el 28 de agosto de 2005. Diputados cercanos al Presidente advirtieron que si el Congreso no aprobaba la convocatoria a elecciones renunciaría de inmediato, con carácter esta vez irrevocable.

La tarde del 17 de marzo el Congreso, con el voto de todos los partidos, excepto la bancada oficialista y ADN, rechazó por inconstitucional el proyecto de convocatoria a elecciones enviado por el Presidente. Sus voceros señalaron que la anunciada renuncia irrevocable era una decisión personal sobre la que nada podían hacer o decir. Esa misma noche, el Presidente dirigió un nuevo mensaje a la nación, para afirmar que no podía dejar el Gobierno a dirigentes parlamentarios que ya no representaban al país y que había decidido permanecer en la Presidencia hasta el fin de su mandato, en agosto de 2007.

¿Qué llevó a Mesa a una acción tan aventurada y a final tan poco decoroso? Se dice que, entusiasmado por la movilización de las clases medias, sobrevaloró su fuerza, se creyó dueño de la situación y pensó que podía forzar no sólo la convocatoria a una elección general, sino su propia habilitación como candidato. Estaba seguro de que ganaría esa consulta y que reconstruiría el sistema político en torno suyo. Si la especulación es correcta, esta vez falló el cálculo. Leyó como apoyo personal lo que en verdad era rechazo a los grupos radicales. Su-

bestimó la fuerza de la institucionalidad y la capacidad de reacción de los Partidos, incluido el MAS. Y perdió.

El latente conflicto de poderes se hizo ahora explícito. El Parlamento censuró dos veces al Canciller y decidió aprobar por su cuenta la Ley de Hidrocarburos. La remitió al Ejecutivo para su promulgación. En respuesta, el Presidente volvió a dirigir un mensaje al país. Señaló que temía que la Ley de Hidrocarburos aprobada por el Parlamento era «un instrumento de división de Bolivia», que la unidad nacional estaba en riesgo y que tenía observaciones «conceptuales» a esa Ley. Por eso, invitó a setenta personalidades de organizaciones políticas, cívicas, sociales, empresariales y sindicales a un «Encuentro por la Unidad de Bolivia» para llegar a «acuerdos mínimos en este conjunto de problemas –Ley de hidrocarburos, elección de Prefectos, Referendo Autonómico y Constituyente– que bloquean el país»

Los Poderes Legislativo y Judicial y el Tribunal Constitucional no aceptaron la invitación y el Presidente tuvo que suspender el encuentro.

Finalmente, en la mañana del 17 de mayo, con la capital otra vez conmovida por movilizaciones sociales, el Ministro de la Presidencia anunció que el Presidente no vetaría ni formularía observaciones a la Ley de Hidrocarburos, pero que tampoco la promulgaría. Dejaba esa prerrogativa en el Congreso, una vez que había vencido el plazo que la Constitución estipula para estos casos. Esa misma tarde, Horman-do Vaca Díez, Presidente del Congreso, promulgó la Ley.

El lunes 23 de mayo comienzan las marchas de campesinos hacia La Paz. La Federación de Juntas Vecinales de El Alto declara paro indefinido. El miércoles 1 de junio, mientras los parlamentarios del MAS negocian en el Congreso la concertación de las agendas de octubre y enero, de Occidente y la Media Luna, la dirección de El Alto radicaliza el cerco a La Paz, iniciando el bloqueo de la planta de distribución de carburantes de Senkata, con la intención explícita de derrocar a Mesa.

A partir de entonces se suceden las marchas sobre La Paz de campesinos, universitarios y activistas alteños y mineros cooperativistas, que en el intento de tomar y quemar el Congreso, agreden a vende-

dores callejeros, taxistas, ciudadanos de a pie, creando un profundo sentimiento de rechazo de la población. Los empresarios de Santa Cruz y el Presidente de la Confederación de Empresarios Privados piden la renuncia de Mesa o el adelantamiento de elecciones.

La Iglesia decide mediar a pedido de Mesa, la Asociación Nacional de la Prensa y el propio Evo Morales. Convoca a los Presidentes de los tres poderes y el MAS en Santa Cruz. Esta primera mediación de la iglesia se frustra por la convocatoria inconstitucional de Carlos Mesa, por Decreto de 2 de junio, para elecciones para Referendo Autonómico y Constituyente.

Circulan rumores insistentes de golpe militar el viernes 3, encabezado por el Jefe del Estado Mayor, general Antezana. Solares anuncia su apoyo. Una llamada del Comando Sur aborta el movimiento militar.

El sábado 4 y domingo 5 se realizan las reuniones de los Presidentes de los tres poderes del Estado con el Cardenal. La mediación de la iglesia toma otro rumbo. Ya no trata de armonizar las agendas de octubre y enero, de Autonomía y Constituyente. Ahora se dirige al adelanto de elecciones generales, la última salida política a una confrontación armada.

El lunes 6 se empieza a sentir el impacto del cerco sobre La Paz. No hay gasolina y se descontrolan los precios de alimentos y productos básicos. Los bloqueos cierran prácticamente todos los caminos del país. En Santa Cruz, grupos paramilitares de la Juventud Cruceñista agreden y dispersan una manifestación campesina que intentaba entrar a la ciudad.

La noche de ese lunes, Mesa declara: «Estamos al borde de la guerra civil», renuncia a la Presidencia y, otra vez, malogra la mediación del Cardenal. Ya no es posible la negociación para lograr la renuncia concertada de los Presidentes de las Cámaras de Senadores y Diputados.

El martes 7 llegan a La Paz camiones de cooperativistas mineros (se afirma que por la iniciativa del propio gobierno) y sacuden La Paz con explosiones de dinamita. El miércoles 8 activistas cortan por unas horas el flujo de agua potable a los barrios de Sopocachi, Miraflores y San Pedro.

Se convoca a Congreso para el jueves 9, en Sucre, para considerar la renuncia del Presidente. Evo Morales y la brigada paceña anuncian su asistencia. Mineros y campesinos deciden marchar sobre Sucre para impedir que Hormando Vaca Díez asuma la Presidencia. La sesión del Congreso en Sucre, convocada para las 10 de la mañana, las 4 y 6 de la tarde del jueves 9 de junio, no se puede instalar, por falta de consenso. En la tarde muere un minero herido de bala, cerca de Sucre.

Esa misma mañana, mientras el Congreso trata de reunirse en Sucre, las Fuerzas Armadas concentran fuerzas en La Paz y Santa Cruz para restablecer el orden. Tropas adicionales llegan del interior en cinco aviones Hércules y se instalan en la base de Viacha cerca de La Paz. Hay, en total, 13.000 hombres listos para actuar. No se sabe todavía si ese desplazamiento fue ordenado por Mesa, solicitado por Hormando Vaca Díez o dispuesto por los propios Mandos.

Esa tarde, Carlos Mesa se reúne con su equipo político y los jefes militares. Examina la opción de anunciar que continuará en el Gobierno, una vez que el Poder Legislativo no pudo considerar su renuncia, que clausurará las sesiones del Congreso Nacional y que convocará a elecciones generales. Esa posibilidad, que comienza a consultarse con medios y líderes de opinión, llega en Sucre a oídos de los partidos políticos que habían tratado de forzar la sucesión constitucional. Hormando Vaca Díez y Marío Cossío, Presidentes de las Cámaras de Senadores y de Diputados, renuncian a la sucesión y convocan de inmediato a Congreso. El cuerpo legislativo se reúne a las 21 horas y en quince minutos acepta por unanimidad la renuncia de Mesa y designa a Eduardo Rodríguez, Presidente hasta ese momento de la Corte Suprema de Justicia, como Presidente, con el mandato de convocar a elecciones generales.

Rodríguez toma posesión del cargo a las 22:30 de la noche, en ceremonia sin protocolo ni banda ni medalla presidencial, en la Casa de la Libertad en Sucre, en la misma sala en la que se declaró la Independencia de la República.

Mesa deja, silencioso, el Palacio Quemado.

LOS PROTAGONISTAS

Recapitulemos el itinerario del desborde contestatario descrito en las páginas anteriores. Comenzó en Cochabamba, en abril de 2000, durante el gobierno de Hugo Bánzer, con la llamada guerra del agua. Siguió en noviembre de 2000 con el primer motín policial y el bloqueo del altiplano, comandado por Felipe Quispe. En febrero de 2003, se produjo la confrontación armada entre fuerzas armadas y policiales, con un saldo de 34 muertos y el saqueo del centro de La Paz. La secuencia que culminó con el derrocamiento de Sánchez de Lozada el 17 de octubre de 2003, dejó más de media centena de muertos, luego de la confrontación de Sorata, Warisata y El Alto. El último capítulo de ese movimiento es el que acaba de concluir con el cerco de La Paz, el bloqueo de caminos, la renuncia de Carlos Mesa y la instalación de Eduardo Rodríguez. La descripción no estará completa si no se registra la reacción contraria, la que equilibra el juego, el paro cívico y el Cabildo Abierto de Santa Cruz, de enero de 2005.

La acción de masas tiene dos actores, claramente diferenciados. Uno es el Movimiento al Socialismo, de Evo Morales, cuyo núcleo cocalero se amplió a organizaciones rurales de todo el país y penetró en la estructura urbana de los partidos de izquierda. Combina la presión callejera con la acción parlamentaria. En el minuto de la verdad —dicen que siguiendo el consejo de Hugo Chávez, a pedido de Lula y Kirchner—, la corriente que privilegia la toma del poder por la vía democrática se impuso a la tendencia insurreccional. La participación de Morales en el Congreso reunido en Sucre fue crítica para definir el camino de la designación de Eduardo Rodríguez y la convocatoria a elecciones generales.

El otro es el de los varios grupos radicales que operan en El Alto, reunidos en torno a las Juntas Vecinales, la Central Obrera, La Universidad Popular y los sindicatos indigenistas aymaras. Tuvo participación central en el saqueo del centro de La Paz en febrero de 2003, en la explosión social de octubre de 2003, en la expulsión de Aguas del Illimani y el cerco de La Paz en mayo y junio de 2005. Financiado por ONGs antiglobalizadoras, plantea expulsar la inversión extranjera, nacionalizar hidrocarburos sin compensaciones, enfrentar al imperialismo americano y destruir el sistema democrático, instalando un gobierno militar nacionalista con apoyo popular. Su mensaje políti-

co se suele teñir de tintes racistas y amenazas contra los blancos, siguiendo el lenguaje indigenista de Quispe.

Los partidos tradicionales, MNR de Sánchez de Lozada, MIR de Jaime Paz Zamora, NFR de Manfred Reyes Villa, agrupados en el Congreso, recuperaron presencia protagónica en el juego institucional, gracias en buena medida a los errores del Ejecutivo, pero están distantes de representar genuinamente el sentimiento de la ciudadanía, tal como indican consistentemente las encuestas de opinión. Respaldados por el movimiento cívico de Santa Cruz, decidieron crear las condiciones para forzar la renuncia de Mesa y promover la sucesión constitucional de Hormando Vaca Díez, con el propósito de conservar el poder hasta agosto del año 2007, con un gobierno de coalición, para imponer orden en el país y cerrar con el uso de la fuerza el ciclo de agitación social y anarquía, al tiempo que negociaban con los grupos radicales de El Alto concesiones como la nacionalización de los hidrocarburos y la convocatoria inmediata a una Asamblea Constituyente. Tomaron contactos diplomáticos para asegurar apoyo internacional al plan, que finalmente naufragó ante la resistencia del MAS y la oposición de la propia opinión pública, que reaccionó indignada ante la posibilidad de que se repusiera la megacoalición que gobernó con Sánchez de Lozada.

Otro actor principal del elenco fue el Presidente Mesa. Encabezó un gobierno débil, en el plano institucional y jurídico. Sin proyecto histórico, sin instrumento partidario, sin representación útil en el espacio parlamentario, nunca tuvo condiciones para abordar la agenda de cambio profundo que el país necesita. Su rol de transición debió definirse en términos mucho más modestos, como puente entre un momento de quiebra y la instalación de un Presidente con mandato legítimo, elegido en las urnas, como lo hiciera Valentín Paniagua, en Perú. Prefirió buscar, como se ha visto, un lugar en los libros de historia como partero de un vasto cambio, con las consecuencias conocidas. Mostró, además, una actitud vacilante en el ejercicio de las responsabilidades del ejercicio del poder. Renunció al uso legítimo de la fuerza pública para mantener el desborde social en el cauce democrático. No quiso tomar decisiones. Las rehuyó siempre.

Demostó ostensible desdén por el sistema político. No comprendió que la negociación es la esencia del juego democrático y que la vi-

sión de largo plazo exige la concertación de intereses opuestos. Pensó y actuó como si tratara de un juego de suma cero, en el que uno (él) debía ganar y otro perder. Consciente de la debilidad de los partidos políticos, estigmatizados por la corrupción y el clientelismo, pretendió imponerles la agenda que improvisó en las calles todavía humeantes de El Alto. Trató de sustituir el diálogo con los adversarios por la apelación directa al ciudadano a través de la televisión. Tuvo relativo éxito en este propósito, en la primera fase de su gobierno, pero terminó por desacreditar este método, porque no cumplió sus compromisos, en numerosas ocasiones. Su decisión de permanecer en el Gobierno, pese a todo y contra todo, que coronó en el último y desesperado intento de repetir el ejemplo maquiavélico de Fujimori, con el cierre del Congreso, selló su paso por el escenario político boliviano.

En las elecciones municipales emergieron nuevas figuras —o antiguas figuras con rostros retocados—, y es de esperar que un fenómeno semejante se repita en los comicios prefecturales convocados para el próximo mes de agosto. Si así fuera se podría pensar que el necesario proceso de recomposición del sistema político se iniciará desde las bases, en las diferentes regiones del país.

El hecho es que, de esa u otra manera, alguna organización política tiene que llenar el vacío que dejó el colapso de los partidos tradicionales. Los grandes centros urbanos —La Paz, Cochabamba, Santa Cruz—, en los que se concentra la masa crítica económica, social e ideológica del país, se quedaron sin instrumentos políticos. En su ausencia, en la carencia de un proyecto histórico que articule y presente los intereses del centro dominante de la nacionalidad, las organizaciones de la sociedad civil y de la periferie rural trataron de llenar el espacio vacante, con los resultados que están a la vista. Desorden, incertidumbre, riesgo de anarquía.

LA AGENDA

El país estuvo en el borde mismo de la confrontación violenta. La provocaban los movimientos de El Alto y la aceptaban los cívicos de Santa Cruz.

Se sabe ahora —contra la especulación sensacionalista de tantos comentaristas, dentro y fuera— que no está en riesgo la integridad territorial de Bolivia, que un golpe militar tradicional no es factible, que

la insurrección social no puede culminar con la toma del poder y que no hay posibilidades de guerra civil. Pero eso no quiere decir que los problemas estén resueltos. Santa Cruz y los departamentos de la media luna continuarán enfrentados con los departamentos de occidente hasta definir cómo se distribuye el excedente generado por las exportaciones de gas, de granos, de la minería y de manufacturas. Los militares crecerán en su papel de arbitraje mientras se reconstruye el sistema político. Los movimientos sociales persistirán en su estrategia de imponer sus demandas en la calle. Y se mantendrá la amenaza de una solución violenta, por un buen tiempo.

Y, en ese contexto, debe encarar una agenda extraordinariamente compleja. Una que definirá, sin hipérbolo, su propio destino.

Mirémosla.

El tema regional

El Cabildo de Santa Cruz colocó en el centro del debate un tema ineludible y complejo. La estructura tradicional de poder regional se ha modificado.

Desde la fundación de la República, el poder demográfico, económico y político se concentró en el macizo andino. Las exportaciones de minerales salían de ese territorio y allí se encontraban los principales centros urbanos –La Paz, Potosí, Sucre, Cochabamba, Oruro. Desde que los precios del estaño colapsaron a principios de los años ochenta en el siglo veinte, el núcleo del poder económico se desplazó a las regiones orientales. Las ventas de productos agropecuarios de las zonas tropicales, –maderas, soya, castaña, carne– equilibraron primero y desplazaron después a los minerales de los primeros lugares de las exportaciones. El descubrimiento de las reservas de gas en Tarija y Santa Cruz y el comienzo de un nuevo ciclo productivo consolidaron el cambio. Lo hicieron irreversible.

La relación de poder regional se alteró e impuso la necesidad de encontrar un nuevo equilibrio y una expresión institucional y política que corresponda a esa realidad. La descentralización política, la elección directa de Prefectos, la expansión de la autonomía operativa y administrativa, son las primeras expresiones jurídicas de avance en esa dirección. Esa mutación es un proceso histórico, tomará su tiempo.

po y abarcará otros campos. Avanzará paso a paso. No es un acontecimiento, con fecha y forma determinada.

Santa Cruz y Tarija son subvertores del orden establecido, en la mejor acepción de la palabra. Quieren cambiarlo. Pero no pretenden separarse del país. Interpretar que quieren renunciar a su condición potencial de liderazgo nacional por una forma inviable de independencia, es pensar mal de la inteligencia de su liderato y del pueblo cruceño y chapaco.

La agenda de desigualdad

En el extremo opuesto del país, los movimientos sociales han marcado a fuego la necesidad de encarar y resolver el problema de la desigualdad y de la marginación de los sectores populares, particularmente de los pueblos indígenas.

Octavio Paz debió pensar en Bolivia cuando escribió en el *Laberinto de la Soledad* estas frases terribles: «en nuestro territorio no sólo conviven distintas razas y lenguas, sino varios niveles históricos. Hay quienes viven antes de la historia –otros al margen de ella–. Varias épocas se enfrentan, se ignoran o se entre devoran sobre una misma tierra. Viven bajo el mismo cielo, con héroes, costumbres, calendarios y nociones morales diferentes».

La Reforma Agraria de 1953, con la consigna «la tierra es para quien la trabaja», expropió los grandes fundos, devolvió dignidad humana a los indígenas en el occidente del país y desencadenó un enorme proceso de redistribución del poder y de asimilación y mestizaje, étnico y económico. Luego de la Revolución, los campesinos se convirtieron en un factor político importante. Primero como base social de sustentación de los partidos progresistas de la clase media, particularmente del MNR. En los últimos años, han comenzado a liberarse del tutelaje urbano y a crear sus propias organizaciones políticas. Ése es el aporte del Movimiento al Socialismo. Viene del campo y trata de llegar a la ciudad.

Tienen tierra, dignidad, participación política, pero no han logrado vencer la barrera de la desigualdad. Los cinturones de pobreza de las grandes ciudades se alimentan de campesinos que huyen de la pobreza extrema de las zonas rurales. Los intentos de modernización de

la economía no han logrado resolver ese problema y no estoy seguro de que lo hubieran encarado. La importante inversión de la democracia en educación y salud mejoró sustantivamente varios de los indicadores de desarrollo humano, pero no enfrentó el tema de la desigualdad. Olvidó el componente productivo, la vinculación del productor con el mercado. Por eso, desigualdad, inequidad, están allí, donde siempre estuvieron. En los primeros lugares de la agenda de cambios profundos.

El tema tiene una dimensión adicional. Los indígenas reclaman el reconocimiento de su identidad y demandan su autonomía política y cultural. Si uno examina con más detenimiento el planteo, confuso y contradictorio, advierte que refleja el sentimiento de frustración y de impotencia del mundo rural ante la imposibilidad de contener la migración indígena a las ciudades y su incorporación creciente en la economía y culturas urbanas.

Nada es inmutable. Ni la cultura. Tiene una relación directa con la manera de producir. Los modos de producción condicionan las formas culturales. Y hay una enorme distancia entre la forma de producir y vivir del mundo rural con las exigencias de las grandes ciudades de este tiempo. Si se miran así las cosas, la brecha cultural boliviana no es, en realidad, la que divide a indígenas y blancos, sino la que distancia a los campesinos de los habitantes de las urbes metropolitanas. Por eso, los valores culturales de la tradición andina están sometidos a una intensa presión de adaptación y cambio. Esa tensión entre tradición y modernidad, comprimida en el breve espacio temporal del proceso de urbanización boliviano, explica en buena medida la emergencia y amplificación del conflicto indígena.

La modificación de la política económica

Desde luego, la reivindicación campesina encuentra eco solidario en los sectores marginales de las concentraciones urbanas, descontentos por sus propias razones con la privatización de las empresas públicas y los procesos de ajuste estructural y de apertura comercial y financiera. Con razón sindicaron a esas medidas de aumentar la desigualdad, frenar el crecimiento, concentrar la riqueza, desmantelar el Estado, herir el orgullo nacional, en nombre de la modernización y del salto hacia adelante.

En el balance no cuenta —o sale perdiendo— lo que hizo la democracia de estos veinte años para garantizar la libertad de expresión, de organización y de movilización en el plano político; la construcción de las instituciones democráticas en el plano jurídico; la mejoría innegable de los indicadores de alfabetización, mortalidad infantil, acceso a servicios públicos, en el plano social, y la conformación del primer esbozo de mercado interno en la articulación de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, en el plano económico.

Dos vertientes disputan el liderato de esa demanda de cambio y de lo que Natalio Botana llama «el desborde contestatario» de América Latina. Una, materializada en un proyecto de izquierda democrática, que aprendió las lecciones del pasado y que se propone redistribuir el ingreso, luchar contra la pobreza, en el marco del sistema democrático y del respeto a los derechos ciudadanos. Otra, que enarbola las banderas de resistencia a la globalización, al imperialismo y a las grandes corporaciones, que ha encontrado su cauce en un esquema político que recuerda mucho las gestiones del Coronel Perón y del General Velasco Alvarado.

En Bolivia, como en los otros países de la región, está clara la necesidad de modificar la política económica como punto inexcusable de la agenda del cambio profundo. Pero aún no se ha dilucidado todavía a qué proyecto político le corresponderá la responsabilidad de encaminarlo.

No es posible delinear con precisión los rasgos que distinguirán el modelo que se comienza a construir. Pero sí es posible aventurar la afirmación que no será el de predominio absoluto de la lógica de mercado, que imperó a lo largo de los últimos veinte años. Se procurará con seguridad un mejor equilibrio en la relación entre Estado y economía. Sin renunciar a la disciplina fiscal se tratará de incluir empleo, crecimiento, redistribución, como elementos sustantivos de la política económica. Se buscará una forma de accionar que rompa el círculo vicioso que creó un mercado que fragmentaba la sociedad, por otro en el que la cohesión social ofrezca a los actores económicos seguridad y previsibilidad de largo plazo. Y tendrá que definir una nueva forma de relacionamiento con el sistema internacional, capaz de conciliar la exigencia de la globalización con la demanda de desarrollo nacional y la gestión de las corporaciones transnacionales con los

parámetros del interés nacional. En cierta forma, el tratamiento del tema del gas, lleno de sonido y furia, es el comienzo de ese debate, que todavía tomará años antes de cristalizar en opciones claras.

La reconstrucción del Estado

La primera condición para avanzar en esas tareas es revalorizar el papel del Estado. Su tradicional debilidad fue agravada por un asedio sistemático, encaminado a garantizar el predominio de las fuerzas del mercado sobre cualquier otra consideración.

Las consecuencias son conocidas y, en el caso de Bolivia, dramáticas. La ejecución sumaria y pública del Alcalde de Ayo Ayo por una turba enfurecida, en la presencia de una fuerza pública impedida de actuar, fue la prueba trágica de la impotencia de un Estado que no podía garantizar la seguridad de sus ciudadanos y el imperio de la ley. Ese mismo Estado ha terminado por aceptar como normal el bloqueo impune de caminos y rutas públicas, la imposición de demandas por la presión social, el desprecio por los procedimientos legales. Los poderes fácticos –internacionales, empresariales, sindicales– imponen su voluntad por fuera de las instituciones estatales, en perjuicio de los excluidos y pobres. La pésima calidad de los servicios de educación, salud, seguridad social, policía, que ofrece el Estado, en contraste con los que ofrecen las empresas privadas para los que pueden pagarlos, acentúa de manera peligrosa la fragmentación de la sociedad boliviana. En todas partes se encuentran las huellas de la ausencia de Estado.

Apenas es necesario anotar que esa situación no puede continuar. Y ya ha comenzado a cambiar. Pero si se subraya la necesidad inexcusable del cambio, es preciso advertir de los inmensos riesgos de la improvisación, la demagogia y la consigna en el tratamiento de temas de tanta complejidad y trascendencia. «Con las cosas de comer no se juega.» Son decisiones en materia grave, de consecuencias importantes, de largo plazo.

• • •

En el largo discurso que precede a estas frases finales, he descrito el escenario, los actuales protagonistas y la agenda de este momento de cambio de la historia de Bolivia.

El lector ya habrá advertido que noto la ausencia del proyecto histórico, del partido y del liderato que guíe a la nación en la ardua jornada de reconstrucción que tiene por delante. Debo confesar, sin embargo, que tengo la convicción de que, en algún lugar del territorio o en varios al mismo tiempo, ya se está gestando la idea, la organización y la conducción de un movimiento político que tome firme la bandera de la unidad de la República, que encare las tareas de lucha contra la pobreza y la desigualdad y que mire de frente, sin complejos, la inserción de Bolivia en el mundo global.

O tal vez sólo sea —otra vez con las palabras de Octavio Paz— que «el que ha visto la esperanza, no la olvida».

La Paz, junio 2005. •